



RESUMEN Y PROSPECTIVA

- La semana pasada, tras numerosas agresiones y amenazas, renunció el cabildo completo de Penjamillo, Michoacán, por lo que el Congreso del Estado procedió a declarar la desaparición de poderes y a nombrar un Consejo Municipal. En 2021 un comando armado ya había desaparecido al alcalde electo. Sin embargo, hay un vacío casi completo de información sobre las actividades del crimen organizado en Penjamillo (en el municipio prácticamente no hay registros de enfrentamientos u operativos policiales o militares). Ni siquiera se tiene certeza sobre el nombre de la organización responsable de las intimidaciones a autoridades. Lo anterior sugiere, por un lado, que el grupo responsable tiene una posición hegemónica y un férreo control territorial. Por otro lado, es altamente probable que su principal objetivo sea apropiarse de recursos del Ayuntamiento.
- Durante el proceso electoral del año pasado se registraron 131 homicidios de candidatos, en 107 municipios distribuidos en 23 entidades federativas. Entre los municipios con mayor número de homicidios dolosos a nivel nacional, el 53.3% registró un aumento seis meses después del incidente violento contra candidatos electorales, destacan con más del 30% de incremento: Monterrey (Nuevo León), Iguala (Guerrero), Ciénega de Flores (Nuevo León), Zumpango (Estado de México), Apaseo el Grande (Guanajuato), Victoria (Tamaulipas), y Villagrán (Guanajuato).
- El jueves 24 de noviembre, en el contexto de un operativo conjunto contra un grupo de secuestradores (vinculado con policías municipales y con CJNG) fue asesinado en el municipio de Pinos el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Zacatecas. Si bien no se trató de un ataque directo, José Silvestre Urzúa Padilla es el militar de más alto rango asesinado en funciones en este sexenio. El posible involucramiento del CJNG muestra que esta organización criminal continúa llevando a cabo directa e indirectamente agresiones contra funcionarios de alto perfil. Previsiblemente, además de un incremento de la presencia militar, el gobierno federal priorizará la detención de los responsables y la contención del CJNG en la región; por lo que no se descarta un incremento temporal de la violencia en el sureste de Zacatecas.
- El 23 de noviembre, un líder transportista acapulquense fue asesinado en el interior de las oficinas de su agrupación sindical. Si bien éste es un gremio relativamente pequeño —aparentemente, sólo tiene presencia en Acapulco—, el contexto violencia en contra de taxistas, podría detonar conflictos sociales (bloqueos o paro de labores, por ejemplo).

Si se toma en consideración el carácter sensible del sector turismo, éstos podrían ser especialmente nocivos para la economía local si es que ocurren en diciembre. Por otro lado, los vínculos que han formado entre grupos criminales y taxistas, así como el apoyo clientelar que reciben los gremios (y que obstruye su supervisión); son dos factores relevantes que generan un ambiente propicio para el delito e impunidad.

- El pasado viernes 18 de noviembre, integrantes de la Guardia Nacional localizaron un campamento clandestino en la región serrana de Chiapas. En el lugar rescataron a 386 migrantes (217 guatemaltecos, 85 nicaragüenses, 45 ecuatorianos, 11 hondureños, siete salvadoreños y tres cubanos) que fueron abandonados por un grupo criminal dedicado al tráfico de personas. A unas semanas de que el gobierno estadounidense elimine la política fronteriza *Título 42* (que permite la deportación inmediata de indocumentados en la frontera México-EE.UU.) es muy probable que se trate de una célula del CJNG que emplea la ruta de trasiego que atraviesa el centro de Chiapas por la zona de Los Altos para arribar a Pichucalco, Tabasco. Aunado a ello, esta zona montañosa presenta un bajo número de autoridades y no registra avances en la instalación de cuarteles de la Guardia Nacional. A pesar de que el gobierno de EEUU podría disminuir el número de deportaciones en su territorio, lo cual aliviaría la dureza de la política migratoria mexicana, Chiapas vive uno de los momentos de mayor tráfico de personas, con un total acumulado de más de 64 mil solicitudes de refugio en México en 2022, situación que se agravará en los siguientes meses.

ANÁLISIS



Desaparición de poderes en Penjamillo, tras acoso criminal a autoridades

VIOLENCIA POLÍTICA

La crisis en Penjamillo ilustra el control que el crimen organizado busca ejercer sobre autoridades municipales, por medio de la violencia, probablemente con el objetivo de apropiarse de recursos públicos. En 2021 desapareció el alcalde electo, Gilberto Mejía Salgado, del Partido Encuentro Solidario. La desaparición tuvo lugar poco después de que Mejía Salgado ganara una reñida elección por la alcaldía. Algunos medios atribuyeron la desaparición al CJNG. Sin embargo, en el municipio prácticamente no hay registros públicos de presencia criminal, enfrentamientos u operativos policiales o militares, fuera de las agresiones contra autoridades locales.

En octubre pasado, una síndica y cinco regidoras denunciaron que sujetos armados ingresaron en sus domicilios para amenazarlas. A mediados de noviembre, la alcaldesa sustituta, Xóchitl Kareli del Río Carranza, presentó su renuncia, también por amenazas. Finalmente, el

miércoles pasado se confirmó que todos los miembros del cabildo de Penjamillo habían renunciado.

Dentro de la crítica situación de intimidación de autoridades, es positivo que, tras la desaparición de poderes en el municipio, el Congreso Estatal haya logrado un acuerdo para la conformación de un Consejo Municipal que asumirá las funciones de gobierno durante el resto del trienio y que, según declararon sus integrantes, despachará en Penjamillo. En el pasado ha sido frecuente que, ante contextos severos de inseguridad, algunos cabildos se ausenten de sus municipios (lo que favorece que actores criminales o grupos de autodefensa consoliden su autoridad *de facto*). Igualmente es positivo que la Secretaría de Seguridad del estado haya nombrado a nuevos mandos de la policía municipal. Por otro lado, es probable que en otros municipios de la región también operen redes criminales que hayan logrado el control de los ayuntamientos.

































Análisis de homicidios dolosos en municipios con violencia electoral

ANÁLISIS LANTIA INTELLIGENCE

Lantia Intelligence realiza un seguimiento del nivel de homicidios dolosos registrados en municipios en los que se registraron eventos de violencia electoral durante el año pasado (junio de 2020 a mayo de 2021), específicamente asesinatos de candidatos. De este seguimiento se desprende lo siguiente:

- Se registraron 131 homicidios de candidatos en 107 municipios de 23 entidades federativas. El 51.1% de los homicidios se concentraron en cinco estados: Veracruz (14.5%), Guerrero (13.0%), Guanajuato (9.2%), Estado de México (7.6%), y Oaxaca (6.9%).
- La comparación del nivel de homicidios —seis meses antes y seis meses después del mes en el que se registró el asesinato de un candidato electoral— arroja los siguientes resultados (el análisis corresponde a los 30 municipios que se encuentran entre los de mayor nivel de violencia en el país):
 - El 53.3% de los municipios presentaron un aumento en el número de homicidios dolosos. Los que registraron un incremento de por los menos el 30% fueron Monterrey (Nuevo León), Iguala (Guerrero), Ciénega de Flores (Nuevo León), Zumpango (Estado de México), Apaseo el Grande (Guanajuato), Victoria (Tamaulipas), y Villagrán (Guanajuato).
 - En el 43.3% de los municipios que presentaron una disminución, la cual fue mayor en Guaymas (Sonora), Ensenada (Baja California), Salvatierra (Guanajuato), Chimalhuacán (Estado de México), Chilpancingo (Guerrero), y Tecate (Baja California).
 - Entre los municipios que presentaron un cambio mínimo, menor a +/-3%, se encuentran: Tijuana (Baja California), Celaya (Guanajuato), Morelos (Cuernavaca), y Solidaridad (Quintana Roo).

Homicidios dolosos en municipios con violencia electoral (homicidio de candidatos)

Entidad	Municipio	Tendencia Mensual	Promedio Semestral		% Cambio
			Antes	Después	
Baja California	Tijuana		157	158	0.7%
Chihuahua	Juárez		96	102	6.6%
Guanajuato	León		53	61	15.0%
Sonora	Cajeme		45	51	13.2%
Guanajuato	Celaya		35	34	-2.9%
Guerrero	Acapulco		32	40	25.1%
Chihuahua	Chihuahua		25	28	12.0%
Michoacán	Morelia		33	26	-19.8%
San Luis Potosí	San Luis Potosí		19	18	-5.3%
Zacatecas	Fresnillo		29	34	14.9%
Nuevo León	Monterrey		14	23	60.0%
Morelos	Cuernavaca		11	11	1.6%
Sonora	Guaymas		14	10	-26.2%
Baja California	Ensenada		33	21	-35.7%
CDMX	Iztapalapa		21	19	-9.8%
Guanajuato	Salvatierra		8	5	-38.0%
Guerrero	Iguala		15	20	40.2%
México	Chimalhuacán		11	8	-21.9%
Guerrero	Chilpancingo		8	6	-24.5%
Morelos	Cuatla		5	6	10.0%
Quintana Roo	Solidaridad		8	8	0.0%
Nuevo León	Ciénega de Flores		3	4	40.0%
México	Zumpango		4	5	30.4%
Baja California	Tecate		20	15	-25.6%
México	Chalco		6	5	-11.4%
Guanajuato	Apaseo el Grande		9	13	41.5%
Tamaulipas	Victoria		4	7	70.8%
Guanajuato	Villagrán		2	4	69.2%
Guerrero	Zihuatanejo		8	7	-18.8%
México	La Paz		6	5	-19.4%

Nota (*): Tendencia mensual de enero de 2020 a octubre de 2022.



Grupo de secuestradores vinculados al CJNG responsables del homicidio del coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas

RIESGO DE SEGURIDAD

El 24 de noviembre en un operativo conjunto en el municipio de Pinos en Zacatecas —que buscaba realizar detenciones de integrantes de policía municipal supuestamente coludidos con un grupo de secuestradores vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— fue asesinado el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Zacatecas, el general José Silvestre Urzúa Padilla.

- El operativo se llevó a cabo en las comunidades de Pedregoso, Jaltomate y El Carmen en la frontera con San Luis Potosí y también buscaba revisar la licencia de armas de los policías municipales.
- En el contexto de estas acciones, el general Urzúa fue asesinado en un enfrentamiento con un grupo afín al CJNG en la comunidad de Jaltomate. Urzúa fue designado como coordinador estatal de la Guardia Nacional en enero de este año.
- Un presunto miembro del CJNG también falleció en la agresión; además, tres integrantes de la Guardia Nacional, dos policías de investigación de la fiscalía estatal, así como dos elementos de la Coordinación Nacional Antisecuestro resultaron lesionados.

En el municipio de Pinos, Lantia Intelligence registra presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación y de escisiones de Los Zetas —Los Zetas Vieja Escuela y Los Talibanes (actualmente aliado a Los Zambada del Cártel de Sinaloa)— y del Cártel del Golfo (Los Metros y Los Ciclonos).

De acuerdo con el Índice de Riesgo por Crimen Organizado (IRCO), Zacatecas tiene un nivel de riesgo crítico —el estado que registra el riesgo más alto del país, después de Colima— y si bien se observa una ligera tendencia de mejora se observan agresiones a comercios, autoridades y mujeres.

- Del primer trimestre de 2018 al tercer trimestre de 2022, el municipio de Pinos en el suroeste de Zacatecas registra 60 víctimas letales del crimen organizado —20% de éstas han ocurrido durante los primeros tres trimestres de este año.
- En este lapso, además del general Urzúa, otro militar ha sido asesinado, así como cinco policías municipales. Las víctimas letales del crimen organizado en este municipio, sin embargo, representan menos del dos por ciento del total estatal; pues la violencia se concentra en la región centro, en particular en Fresnillo.
- En todo caso, las circunstancias del homicidio de Urzúa sugieren que si bien el municipio no ha sido violento sí tiene un problema severo de infiltración criminal.



Violencia en contra de taxistas intensifica riesgo de conflictos sociales en Acapulco, Guerrero

RIESGO SOCIAL

El 23 de noviembre, el líder transportista acapulqueño Raúl Portillo Andraca fue asesinado a disparos en el interior de su oficina en la colonia Emiliano Zapata. Hasta el momento de su muerte, él era el presidente de la Confederación Regional de Transportistas del Estado de Guerrero (CRTEG) —un gremio de transporte colectivo y taxi— con presencia en el municipio de Acapulco. Por el momento, no se han revelado los motivos concretos de su asesinato, pero es probable que tenga relación con disputas criminales locales.

- Al igual que en otras ciudades —especialmente, centros turísticos— grupos criminales aprovechan la estructura de gremios de taxis para cooptar a sus choferes y hacerlos transportar droga u otras mercancías ilícitas. Los taxis son especialmente útiles, pues usualmente no son el objetivo de cuerpos de policía y, en caso de ser detenidos, cuentan con el apoyo de sus compañeros para ejercer presión para que sean liberados.
- Sin embargo, esta colaboración con criminales eleva el riesgo de que los choferes cooptados —pero también otros que no, así como sus usuarios— sean potenciales víctimas de ataques. Tan sólo en el mes de noviembre, en Acapulco se tiene registro de múltiples incidentes de actividad criminal en contra de taxis: el 01 de noviembre, un incendio provocado en la costera Miguel Alemán; un cadáver encajuelado en taxi el 05 en Playa Caleta; un chofer asesinado en Renacimiento el 06; y otro en Vicente Guerrero el 08; y un último en Renacimiento el 14.

Si bien la CRTEG no es uno de los gremios de transportistas más importantes de la región —de hecho, éste es un sindicato aparentemente pequeño—, sí debería de contar con el apoyo de cientos de taxistas en Acapulco, quienes podrían lanzar una campaña en contra de autoridades municipales y locales por el aumento en la violencia en su contra.

- En el corto plazo, existe la posibilidad de que se efectúen bloqueos o paros de labores en toda la ciudad, especialmente nocivos si es que éstos se efectúan en el periodo vacacional de diciembre. Lo anterior, en virtud de la ausencia de acciones por parte del Gobierno estatal y Ayuntamiento por revertir la violencia en su contra.
- Además, aunque la mayor parte de los incidentes ocurrieron en la periferia de Acapulco —zonas en la que el tránsito de turistas es bajo—, se presume que los conflictos sociales se efectuarían en la zona turística del centro de Acapulco (lo que podría mermar el arribo y actividad en la temporada alta).

Por otro lado, destaca la relación del líder transportista con políticos locales. Al igual que en otras entidades, los gremios de transportistas suelen ser utilizados como apoyo clientelar para ganar las elecciones. Sin embargo, esta circunstancia también tiene el efecto altamente nocivo de reducir el número de operativos en sus vehículos —en la medida en que éstos

apoyaron a un candidato, si es que éste resulta electo, éstos olvidan efectuar acciones que puedan resultarles en detenciones de sus choferes o aseguramiento de sus vehículos.

- En este sentido, la víctima, Raúl Portillo Andraca participó en diversas campañas políticas; entre las que destacan: el apoyo a la candidata a gobernadora Beatriz Mojica Morga en 2015 (coalición PRD-PT), y en 2021 a Ricardo Taja Ramírez, candidato a alcalde de Acaapulco por el PRI.



Grupos criminales intensifican trasiego de migrantes por rutas terrestres de los Altos de Chiapas

DINÁMICA CRIMINAL

Elementos de la Guardia Nacional que realizaban patrullajes preventivos en las cercanías del Río Grijalva localizaron un campamento clandestino donde 368 migrantes yacían varados. En su camino hacía EEUU, un grupo criminal (que presuntamente trasladaría a estas personas hacia la frontera) abandonó a los migrantes en este campamento de difícil acceso. Es muy probable que se trate de una célula criminal del CJNG puesto que esta zona chiapaneca es mayoritariamente controlada por este grupo. En efecto, el CJNG cuenta con un apoyo de bases sociales de comunidades rurales de Chiapas, que tienden a apoyar y proteger la operación delictiva de esta agrupación. En semanas recientes, se ha registrado que pobladores establecen casas de seguridad, proveen de transporte a migrantes e incluso se dedican a la venta ilegal de hidrocarburos. Ante esta situación, para las autoridades resulta complejo hacer frente al fenómeno de tráfico de personas de manera frontal.

Este rescate de migrantes abandonados revela la importancia reciente que tienen las rutas terrestres que conectan la frontera de Guatemala con el resto del sistema carretero. De las cinco rutas terrestres principales que grupos criminales emplean en Chiapas, hay dos que disponen de las carreteras que atraviesan el centro del estado, pasando por Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas para llegar a Tabasco. La primera inicia en Frontera Comalapa pasando por Comitán, Venustiano Carranza, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez para llegar a Ocozocoautla, Veracruz. La segunda, que muy probablemente sea la que usaron criminales en el caso de estos 386 migrantes, comienza en San Cristóbal de las Casas, atraviesa San Juan Chamula, Larrainzar y Pueblo Nuevo Solistahuacán para arribar a Pichucalco, Tabasco. La principal razón del uso de rutas montañosas es la ausencia de cuarteles militares y de agentes de seguridad, lo cual facilita el transporte de camiones de migrantes.

Actualmente, Chiapas registra un clímax del número de migrantes que intentan llegar a la frontera norte del país. Según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), de enero a octubre, en Chiapas se registraron un total de 64 mil 360 solicitudes de refugio de un total de 97 mil 973 a nivel de país, es decir que Chiapas tiene que procesar el 65% de las demandas de refugio. Con estas cifras, se prevé que para finales de 2022, se superen las 129 mil que se registraron en 2021. De modo que el gobierno mexicano se enfrenta

al momento de mayor crisis de migrantes en el territorio, por lo cual es posible que en lo que resta del año se registren múltiples rescates e incluso accidentes de migrantes que atraviesan el territorio.

Cabe destacar que ante este problema, el gobierno de EEUU ha anunciado que el 21 de diciembre cancelará la política llamada *Título 42*, que desde 2020 permite la inmediata deportación de indocumentados en la frontera. Esta acción podría evitar la saturación de migrantes en la frontera norte, al mismo tiempo que podría incentivar la reactivación de las caravanas de migrantes que parten desde el sur. Ante este escenario, también es probable que el número de migrantes que intentan atravesar territorio mexicano aumente en el mediano plazo. Por esta razón, es probable que se intensifique la conflictividad y el riesgo social alrededor de las rutas terrestres de Chiapas.